

El Estado no es un botín político

Cuando la evaluación ideológica se instala como herramienta válida, se abre la puerta a la desconfianza interna, al silenciamiento de opiniones y a la precarización del servicio público.

La reciente polémica por la difusión de una planilla en Excel con evaluaciones “ideológicas” de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas en la región vuelve a encender una alarma conocida, pero no por ello menos grave. Más allá de las responsabilidades puntuales, el episodio expone una práctica que trasciende a un gobierno en particular y que, lamentablemente, se repite con frecuencia en cada cambio de administración.

La utilización de criterios políticos o ideológicos para evaluar la continuidad de equipos técnicos no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que instala la idea de que el Estado es un botín que se reparte según afinidades, y no un espacio al servicio de todos los ciudadanos. Ese mensaje es especialmente dañino en áreas sensibles, donde la experiencia y la continuidad son claves para el desarrollo de políticas públicas eficaces.

El problema no es nuevo. Cada ciclo político arrastra consigo una renovación que, muchas

veces, va más allá de los cargos de confianza y termina afectando a funcionarios cuya labor debería estar resguardada por criterios técnicos. El resultado es un debilitamiento progresivo del aparato estatal, con equipos que deben recomponerse una y otra vez, perdiendo conocimiento acumulado y capacidad de respuesta.

Más preocupante aún es la normalización de estas prácticas. Cuando la evaluación ideológica se instala como herramienta válida, se abre la puerta a la desconfianza interna, al silenciamiento de opiniones y a la precarización del servicio público. Se castiga la diversidad y se privilegia la lealtad política por sobre la competencia profesional.

Este episodio debiera ser una oportunidad para revisar estándares y fortalecer mecanismos que garanticen la probidad y la meritocracia en el Estado. Porque, al final del día, no se trata solo de un escándalo puntual, sino de la calidad de la democracia y del tipo de administración pública que se quiere construir.